

Puerto Montt, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro

Vistos:

A folio 1 comparece Claudio Barahona Ramírez, Defensor Penal Público, en representación de la sentenciada Elizabeth Carolina Zamora Bustos, quien interpone acción constitucional de amparo en contra del Juzgado de Garantía de Ancud, por las resoluciones dictadas el 10 y 19 de junio de 2024 por el Magistrado Fernando Feliú Correa, por medio de las cuales no dio lugar a fijar audiencia de cautela de garantías y/o control de ejecución solicitada por la defensa para discutir la suspensión de la pena o su sustitución por razones de género. Sostiene que lo anterior afecta de manera ilegal y arbitraria la libertad personal y seguridad individual de su representada.

Expone que la amparada fue condenada a cumplir una pena efectiva de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de una unidad tributaria mensual y accesorias de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autora de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, impuesta mediante sentencia de 16 de octubre de 2023 dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro, ejecutoriada el 4 de junio de 2024.

Agrega que el Juzgado de Garantía de Ancud en su calidad de tribunal de ejecución, mediante resolución de 6 de junio de 2024, dispuso dar cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal y en consecuencia, despachó orden de detención, disponiendo que una vez detenida debía ser trasladada al centro de cumplimiento penitenciario más cercano al lugar de detención, cuya orden hasta la fecha de interposición de la presente acción se mantiene vigente y pendiente de cumplimiento.

Refiere que la amparada tomó contacto con la defensa, informando que reside sola con su hijo Jhonnattan Dylan Alexis Muñoz Zamora, nacido el 4 de agosto de 2011, de actuales doce años de edad, el cual padece una serie de afecciones que lo hacen dependiente de cuidados permanentes, añadiendo que no cuenta con redes de apoyo que puedan hacerse cargo del niño y que su ingreso a un recinto penitenciario acarrearía en forma consecencial problemas adicionales para su salud, desarrollo e integridad.

Indica que el 10 de junio de 2024 la defensa solicitó al Juzgado de Garantía de Ancud que se fije audiencia de cautela de garantías y/o de control de ejecución para debatir la suspensión de la pena o su sustitución por razones de género y de resguardo de los derechos del niño que tiene a cargo la amparada, solicitando adicionalmente que se autorice la comparecencia de doña Elizabeth Zamora Bustos de manera telemática, en atención a que no se encuentra en la ciudad de Ancud. Añade que de forma paralela,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

solicitó que se dejara sin efecto la referida orden de detención, en tanto no se verifique la discusión principal, resolviendo el tribunal no dar lugar a fijar audiencia, indicando que la sentenciada debía presentarse en el tribunal.

Señala que en vista de lo resuelto, el 19 de junio de 2024, la defensa solicitó por segunda vez que se fije audiencia para los fines ya indicados, explicando esta oportunidad detenida y pormenorizadamente la situación actual de la sentenciada y de su hijo, justificando la necesidad de contar con un pronunciamiento judicial de fondo, ante lo cual el tribunal recurrido, con igual fecha, nuevamente resuelve no dar lugar a fijar dicha audiencia al señalar “Estese al mérito de lo resuelto con fecha 10 de junio de 2024”.

Alega que las decisiones judiciales indicadas se han transformado en actuaciones jurisdiccionales ilegales que afectan la libertad personal, ya que mantienen la orden de detención vigente y de forma indirecta, hacen depender la comparecencia personal de la amparada al tribunal para conceder la audiencia citada, pese a que no existe norma que lo exija como requisito de validez de la misma.

En cuanto al fondo del asunto, señala que conforme a informe social que acompaña de 18 de junio de 2024, anamnesis de atención de 6 de junio de 2024 realizada por la pediatra Constanza Herrera e informe elaborado por el Proyecto Diagnóstico Clínico Especializado Enakost de 14 de junio de 2024 en el marco de la causa proteccional RIT P-955-2024 que se sigue ante el Juzgado de Familia de Ancud, se colige que la amparada es jefa de hogar de familia uniparental, que no cuenta con redes de apoyo y quien realiza actividades informales para el sustento del hogar y cuidado de su hijo. Detalla que el niño sufrió cáncer testicular a los 6 años y que el 2024 ha iniciado una serie de controles de especialidad en el Hospital de Puerto Montt, ya que al sufrir orquidectomía derecha, debe iniciar tratamiento hormonal y eventual reconstrucción de partes extirpadas. Agrega que se encuentra a la espera de citaciones por neurólogo pediátrico, ya que sufre epilepsia no refractaria y Síndrome de Tourette.

Indica que el último de los informes aludidos refiere que recientemente el niño habría develado que habría sido víctima de abuso sexual infantil y violación por parte de otro niño, mientras estuvo en la Aldea SOS en el período 2021-2022, dando cuenta de confirmación diagnóstica en orden a que es portador de sífilis, lo que demuestra según el informe, la inconveniencia de una nueva institucionalización del niño con motivo del eventual ingreso de su madre a cumplir su condena al interior de un recinto penitenciario. A continuación, señala que durante el semestre en curso, la amparada ha asumido responsablemente las múltiples atenciones interdisciplinarias que debe recibir su hijo,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

resaltando que para el presente mes de junio de 2024 aún quedan citas médicas a las que debe acudir.

En cuanto al derecho, cita los artículos 19 N°3 y N°7 de la Constitución Política de la República y a propósito de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5, cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, afirma que instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile permiten a las mujeres acceder a medidas alternativas a la privación de libertad para efectos del cumplimiento de una condena, a saber, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Luego, se refiere a las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes conocidas como las Reglas de Bangkok, las Reglas de Tokio y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

Sostiene que una forma de cumplir con los estándares de género consiste en la aplicación de la prisión domiciliaria para las mujeres madres con niños, lo que constituye a su juicio una respuesta frente a las afectaciones diferenciales que sufren las mujeres por motivos de género evitando un tratamiento neutral que, en los hechos, tiene resultados discriminatorios. Lo anterior, afirma, también se condice con lo establecido en los artículos 3, 18, 24 y 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Finalmente, cita la sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°9886-2024 y las dictadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causas Rol N°327-202 y N°256-2023.

Solicita que se acoja la presente acción y en lo principal, se disponga que tribunal no inhabilitado fije audiencia para discutir solicitud de suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad, y en subsidio, que esta Ilustrísima Corte permita abrir debate sobre la precitada materia.

Acompaña a su presentación: 1. Escritos de la defensa por los cuales se solicita audiencia para discutir la sustitución o suspensión de la pena privativa de libertad. 2. Resoluciones del 10 y 19 de junio de 2024, del Juzgado de Garantía de Ancud. 3. Sentencia de Condena del TOP Castro de 16 de octubre de 2023, en RUC 2101153908-1. 4. Informe Social de fecha 18 de junio de 2024, que da cuenta de la situación familiar y de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

salud de la amparada que incluye ficha clínica del menor. 5. Certificado Neurología Pediátrica del niño Jhonnattan Dylan Alexis Muñoz Zamora.

A folio 6, evacuó informe Fernando Feliú Correa, Juez titular del Juzgado de Garantía de Ancud, señalando que la amparada no se ha presentado a cumplir la pena y que el artículo 468 del Código Procesal Penal establece que ejecutoriada que sea una sentencia, es imperativo para el juez de garantía decretar su cumplimiento, cuestión que en este caso se materializó en despachar una orden de ingreso.

Refiere que la audiencia solicitada por la defensa no se encuentra establecida en la ley y que por tanto, su rechazo no puede ser calificado como un acto ilegal. Agrega que la norma referida expresamente señala que si “el condenado estuviere en libertad, el tribunal, ordenará inmediatamente su aprehensión.” De modo tal, que resulta abiertamente improcedente e ilegal, dejar sin efecto la orden de detención emitida en contra de la encartada.

Explica que hacer audiencias con una imputada prófuga a través de videoconferencia a fin de discutir la forma en que la defensa quiere que se cumpla una pena, que se encuentra firme por pronunciamiento de los Tribunales competentes en la materia, no resulta procedente y que por ello no puede considerarse ilegal el negar dar pie a este cumplimiento sui generis de las resoluciones judiciales, puesto que el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales es claro en indicar que le corresponde al Tribunal, determinar si uno o más de los intervinientes puede presentarse por videoconferencia.

Precisa que en casos de imputados con orden de detención, únicamente ha permitido la presencia telemática cuando asiste a otro Tribunal, puesto que de otra forma se puede burlar el imperio de la resolución judicial.

En consecuencia, solicita que se rechace la presente acción.

Acompaña a su informe copia del registro de actuaciones en la causa desde que se recibió en etapa de cumplimiento.

A folio 7 encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que “todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

la debida protección del afectado”. De igual forma el inciso tercero de dicho precepto señala que “El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Segundo: Que, según consta de los antecedentes, en particular de la lectura de los actos judiciales impugnados, el 10 y 19 de junio de 2024, se ha liberado pronunciamiento por parte del Juzgado de Garantía de Ancud respecto de la solicitud de audiencia de cautela de garantías impetrada por la defensa de la amparada, mediante resolución fundada. En efecto, los actos jurisdiccionales aludidos fueron expedidos dentro de los márgenes que prevé el artículo 10 del Código Procesal Penal en relación al artículo 36 del mismo cuerpo legal, y en circunstancias de que dichas normas no disponen como secuela procesal la necesaria regulación de una audiencia en los términos solicitados por la defensa.

Tercero: Que, en tales condiciones, los actos impugnados no han perturbado de modo ilegal ni arbitrario a la amparada en el ejercicio legítimo de los derechos que se denuncian infringidos por la acción incoada a su favor, sino que, motivada la resolución judicial que se impugna en la aplicación de la normativa citada, la petición se ha denegado en razón que el juzgador no ha estimado concurrente el supuesto basal de la petición, esto es, que haya un derecho o garantía que requiera ser cautelado a través de medidas conducentes que puede disponer la jurisdicción penal.

Cuarto: Que, además, en el escenario descrito, no es posible advertir que la omisión de fijar audiencia en el diligenciamiento de la petición de cautela de garantías, que se objeta a través de la presente acción, se sitúe en el umbral mínimo de amenaza a la libertad personal o seguridad individual, toda vez que no existe discusión respecto a que la amparada fue condenada en mérito de un proceso legalmente tramitado ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro a la pena efectiva de 521 días de presidio menor en su grado medio y accesorias legales, sentencia judicial que se encuentra firme y ejecutoriada desde el 4 de junio de 2024. En ese contexto, el recurrido no ha hecho más que cumplir con el deber legal que le mandata el artículo 468 del Código Procesal Penal, esto es, decretar las diligencias y comunicaciones que se requieran para dar total cumplimiento del fallo, tal como lo dispuso el tribunal del fondo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

Quinto: Que, conforme a lo razonado, la presente acción no puede prosperar al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad algunas en las decisiones judiciales impugnadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se rechaza la presente acción constitucional entablada a favor de Elizabeth Carolina Zamora Bustos, sin costas.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

No firma el Ministro don Jorge Pizarro Astudillo, quien concurrió a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso.

Amparo N°213-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Jaime Vicente Meza S. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

En Puerto Montt, a veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WHXDXXXXVL